Quito D.M., 09 de Diciembre de 2009

SENTENCIA N. ° 0015-09-SIS-CC

CASO N. ° 0031-09-ISa

Juez Constitucional Sustanciador: Dr. Manuel Viteri Olvera

LA CORTE CONSTITUCIONAL para el periodo de transición:

I.- ANTECEDENTES

Resumen de Admisibilidad

La presente Acción de Incumplimiento ha sido propuesta por la Sra. María Olimpia Quishpe Tandalla, en su calidad de Presidenta de la Asociación de Comerciantes Minoristas del Mercado Comunitario “SAN BARTOLOMÉ DE LUMBISÍ”, en contra del señor Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 436 numeral 5 y 9 de la misma Constitución, y de acuerdo al artículo 9 de las Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de la Corte Constitucional, para el período de transición, la Tercera Sala de Sustanciación procede al conocimiento de la presente acción, como se advierte del Memorando N.º 660-CC-SG-2009 que obra a foja 8 del proceso.

Mediante providencia de fecha 28 de septiembre del 2009 a las 10h40, la Tercera Sala de la Corte Constitucional avocó conocimiento de la presente acción, habiendo correspondido al Dr. Manuel Viteri Olvera actuar como Juez Sustanciador.

Detalle de la Acción Propuesta

La presente acción de incumplimiento va en contra del señor Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha, Dr. Rubén Cevallos Fabara, dentro de la causa N.º 169-2007-KLMB, por el incumplimiento del mencionado Juez, para que se lo sancione de conformidad al Código Orgánico de la Función Judicial y la Constitución de la República.

Antecedentes de hecho y fundamentos de derecho

La Señora María Olimpia Quishpe Tandalla, con fundamento en las normas contenidas en los artículos 93 y 436 numeral 9 de la Constitución de la República, en concordancia con el

artículo 82 y siguientes de las Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, presenta acción constitucional por incumplimiento en los siguientes términos:

Los señores Ministros de la Segunda Sala del antiguo Tribunal Constitucional dictaron una resolución de fecha 11 de julio del 2008, con N.º 0430-07-RA, la misma que se le corrió traslado y se puso en conocimiento del Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha mediante oficio N.º 571-2008 de la Segunda Sala, el 22 de julio del 2008.

En la resolución se ordena devolver el expediente al juzgado de origen para los fines legales pertinentes, y se deja sin efecto la resolución constante en el oficio 0026 del 02 de febrero del 2007, emitido por el Ministro de Agricultura y Ganadería, el cual se encuentra remitido hace más de un año un mes y el señor Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha se niega a cumplir la disposición Constitucional dictada por los señores Ministros de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, que dictaron una Resolución de fecha 11 de julio del 2008, con N.º 0430-07-RA.

Invoca las disposiciones constitucionales contenidas en el artículo 436 numeral 9: conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales.

Petición Concreta

Por las disposiciones constitucionales antes expuestas, se deduce que mediante actas de Asambleas Generales de los Comuneros de Lumbisí, realizadas en los años 1975, 1980 y 1988, los miembros del Cabildo de ese entonces y la comuna de Lumbisí, sienten la necesidad de crear un mercado comunal debido a que beneficiaría a todos los comuneros; en tal virtud, resuelven asignar el sitio en donde funcionaría dicho mercado, por lo que posteriormente se procede a elaborar planos y aprobarlos en el Municipio del Distrito Metropolitano, y denominaron a este sector: “Mercado Comunitario” SAN BARTOLOMÉ DE LA COMUNA DE LUMBISÍ, el cual ha venido funcionando bajo la administración de la asociación de Comerciantes Minoristas de Libre Mercadeo del Mercado Comunitario “San Bartolomé de Lumbisí”.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería y los socios de la Comuna tienen pleno y total conocimiento de que ese lote tuvo la asignación para ese propósito, el cual ha sido producto de antedichas resoluciones de Asambleas Generales de varios años atrás, por lo que según Resolución N.º 1298-OM-2008, la Directora Ejecutiva del CONAMU resolvió aprobar el estatuto presentado y conceder a la Asociación de Mujeres Autónomas de Lumbisí, la personería jurídica en el mes de abril del 2008. Asimismo, esta Asociación se registró en la Dirección Metropolitana de Comercialización en el mismo año, con lo que legitima su personería para impedir esta violación de los derechos constitucionales de cientos de mujeres que representa y que buscan proteger su trabajo. Por esto solicita que se dé trámite a esta acción de incumplimiento contra el señor Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha dentro de la causa N.º 169-2007-KLMB, y solicita que se lo sancione de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial y a la Constitución Política de la República del Ecuador.

II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

El Doctor Rubén Cevallos Fabara, en calidad de Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha, comparece y propone las siguientes excepciones:

La sentencia a la que hace alusión la actora fue recibida por ventanilla el día 23 de julio del 2008 a las 9h35. Mediante decreto del 28 de julio del 2008 a las 08h51, se puso en conocimiento de las partes la recepción del proceso y la ejecutoria del Superior, lo que equivale a decir que del 23 de julio del 2008, fecha en que se recibió por ventanilla dicho proceso, a la fecha en que se envió el indicado decreto, han transcurrido tres días. Posteriormente, la actora ha presentado un escrito el 20 de agosto del 2008, en el cual designa nuevo casillero judicial y abogado patrocinador, mismo que fue proveído el 29 de agosto del 2008.

La actora presenta un escrito el 15 de septiembre del 2008, el que fue proveído el 17 de septiembre del 2008, lo que equivale a decir que tan solo han transcurrido dos días de su presentación, en el cual se está haciendo conocer al señor Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del contenido de la Resolución dictada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional. Señala que la actora presentó un escrito nuevamente el 26 de mayo del 2009 a las 15h35, en el que nuevamente señala casillero judicial y abogado patrocinador, mismo que ha sido proveído mediante decreto del mismo 26 de mayo del 2009 a las 16h07, lo que equivale a decir que no han transcurrido ni veinticuatro horas de su presentación; en dicho decreto se corre traslado con la revocatoria solicitada por la actora, tal como lo determina el debido proceso. La actora presentó un escrito solicitando copias certificadas a su costa del juicio N.º 2007-169 Resp. KLMB.

Mediante decreto del 18 de junio del 2009 a las 17h03, se resolvió la revocatoria solicitada por la actora, por cuanto en su parte pertinente dice: *“...por tanto no se puede dar más de lo pedido en la demanda, y ejecutar más de lo dispuesto en las resoluciones de primera y segunda instancia, además, conforme a los principios rectores contenidos en los Artículos 21, 24 y 25 del Código Orgánico de la Función Judicial Vigente, y considerar los elementos de la diversidad cultural relacionado con las costumbres, prácticas, normas y procedimientos de las personas, grupos y colectividades involucradas en un proceso. En tal virtud, por no haber variado los fundamentos que tuvo el juzgador para dictar la providencia del 6 de mayo del 2009, se niega la revocatoria dictada por los accionantes...”*.

El 24 de julio del 2009 han sido proveídos los escritos del 24 de junio y 23 de julio del 2009, y su contenido dice: *“...de la revisión de los autos se advierte el fiel cumplimiento de las resoluciones emitidas en primera y en segunda instancia; En tal virtud, observando el mandato legal establecido en el segundo inciso del artículo 140 del Código Orgánico de la Función Judicial y por culminado el trámite pertinente a la acción de amparo constitucional, por improcedente, se niega lo solicitado por los accionantes en escritos de 24 de junio y 23 de julio del 2009, y se dispone el archivo de la causa...”*.

Con todo lo expuesto, indica que se ha dado cumplimiento a lo ordenado en las resoluciones de primera y segunda instancia, por lo que mal podía haber aceptado los pedidos de la señora María Olimpia Quishpe Tandalla, debido a que los mismos eran improcedentes y pretendían ir más allá del contexto legal, con el fin de engañar a la Justicia y que caiga en un error jurídico al haber aceptado las pretensiones, que a través de sus escritos la accionante quería obtener, aclarando que en ningún momento ha sido su afán ni mucho menos el no dar cumplimiento a las sentencias de primera y segunda instancia.

III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Consideraciones Generales

Corresponde establecer algunas consideraciones de carácter general respecto a asuntos relacionados con:

- a) Competencia de la Corte Constitucional y validez del proceso; y,
- b) Naturaleza jurídica y finalidad de la Acción de Incumplimiento de Sentencias y Dictámenes Constitucionales.

Determinación de problemas jurídicos a ser resueltos en la presente causa

Para resolver el fondo de la presente causa, el Pleno de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, estima necesario sistematizar los argumentos planteados por el accionante, a partir de los siguientes problemas jurídicos:

- a) ¿Quién está obligado a cumplir la resolución expedida por el ex Tribunal Constitucional en las anteriores acciones de amparo constitucional?
- b) ¿Existe incumplimiento de sentencia o dictamen constitucional por parte del Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha?

Consideraciones y Fundamentos

Consideraciones Generales.- Respecto a las consideraciones generales anotadas, el Pleno de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, señala lo siguiente:

Competencia de la Corte Constitucional y validez del proceso

El Pleno de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, es competente para conocer y resolver la presente causa, de conformidad con lo previsto en los artículos 429 y 436, numerales 5 y 9 de la Constitución de la República, y artículo 27 del Régimen de Transición, publicado con la Constitución de la República en el Registro Oficial N.º 449 del 20 de octubre del 2008, en concordancia con el artículo 82 y siguientes de las Reglas de

Procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N.º 466 del 13 de noviembre del 2008.

La presente acción ha sido tramitada de conformidad con el ordenamiento jurídico constitucional y legal aplicable al caso, por lo cual se declara su validez.

Naturaleza jurídica y finalidad de la Acción de Incumplimiento de las Sentencias y Dictámenes Constitucionales

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, conforme lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución de la República, lo cual implica que en la presente etapa se evidencia la influencia del denominado “neoconstitucionalismo” en nuestra Constitución de la República, entendiéndolo como tal, aquel en que las Constituciones “no se limitan a establecer competencias o a separar a los poderes públicos, sino que contienen altos niveles de normas materiales o sustantivas que condicionan la actuación del Estado por medio de la ordenación de ciertos fines y objetivos”¹.

Marco Aparicio Wilhelmi, respecto de la actual Constitución de la República, manifiesta que: *“en primer lugar, se trata de una centralidad fundamentada en la osadía con la que asume no un mero listado de derechos, sino un renovado y renovador discurso de los derechos, que deja atrás el verso dominante que ha llevado a su desustancialización, a la pérdida de su capacidad de confrontación y de cambio”*; además –añade– *“en segundo término y relacionado con lo anterior, existe una obstinada determinación de asegurar la efectividad de los derechos. El texto constitucional no se limita a declarar su existencia: abre cauces, establece procedimientos, concreta exigencias y prevé mecanismos para garantizar su cumplimiento”*².

De esta manera, a fin de asegurar la efectiva materialización de los derechos, la actual Constitución de la República ha convertido a la Corte Constitucional en máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en dicha materia (artículo 429), otorgándole, entre otras, la facultad de conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales (artículo 436, numeral 9), lo cual se inscribe en la tendencia a incrementar los medios jurídicos coercitivos de los que dispone la justicia constitucional para garantizar que sus sentencias y dictámenes sean acatadas³.

Problemas Jurídicos a ser resueltos.- La accionante solicita que se dé trámite a esta acción de incumplimiento contra el señor Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha, Dr. Rubén Cevallos Fabara, dentro de la causa N.º 169-2007KLMB. Los señores Ministros de la

¹ M. Carbonell, “El neoconstitucionalismo en su laberinto”, en M. Carbonell (ed.) Teoría del neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos, Madrid, Trotta-IIJ (UNAM), 2007, p. 10.

² Marco Aparicio Wilhelmi, “Derechos: enunciación y principios de aplicación”, Serie “Desafíos Constitucionales: La Constitución ecuatoriana del 2008 en perspectiva” Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Tribunal Constitucional, Quito, Octubre de 2008.

³ GRIJALVA JIMENEZ, Agustín, “Perspectivas y desafíos de la Corte Constitucional”, Serie “Desafíos Constitucionales: La Constitución ecuatoriana del 2008 en perspectiva”, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Tribunal Constitucional, Quito, octubre de 2008.

Segunda Sala del antiguo Tribunal Constitucional dictaron una resolución de fecha 11 de julio del 2008, con N.º 430-07-RA, la misma que se le corre traslado y se pone en conocimiento del Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha, quien confirma la petición interpuesta en el recurso de amparo presentado por su Asociación de Comerciantes Minoristas del Mercado Comunitario “San Bartolomé de Lumbisi”, en donde se deja sin efecto la resolución constante en el oficio N.º 0026 del 02 de febrero del 2007, emitida por el Ministro de Agricultura y Ganadería. A fin de resolver el asunto de fondo (determinar si el Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha incurrió en incumplimiento de una resolución constitucional), es necesario dilucidar los problemas jurídicos planteados y que se resumen en:

¿Quién está obligado a cumplir la resolución expedida por el extinto Tribunal Constitucional en las anteriores acciones de amparo constitucional?

De la revisión del proceso se advierte que la accionante, María Olimpia Quishpe Tandalla, dedujo acción de amparo constitucional en contra del Ministro de Agricultura y Ganadería, impugnando la resolución constante en el oficio N.º 0026 del 02 de febrero del 2007. El Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha, mediante resolución expedida el 28 de marzo del 2007, resuelve: *“aceptando el recurso de amparo, dejar sin efecto la resolución constante en el oficio Nro. 0026 de 2 de febrero del 2007...”*; dicha decisión fue apelada, correspondiendo el conocimiento de la causa a la Segunda Sala del entonces Tribunal Constitucional, organismo que, dentro del Caso N.º 430-07-RA, confirmó la decisión subida en grado. Esta resolución, una vez recibida en el juzgado de origen, fue puesta en conocimiento de las partes.

Aceptada la acción de amparo constitucional deducida, correspondía al Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha ordenar el cumplimiento de la resolución expedida por el superior (Tribunal Constitucional), conforme lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Control Constitucional; sin embargo, quien está legalmente obligado a acatar la resolución, por la cual se concedió amparo constitucional, es el organismo o autoridad contra quien se propuso la referida acción constitucional, es decir **“el funcionario o la autoridad pública a quien la resolución vaya dirigida”**, de conformidad con lo ordenado en el artículo 58 ibídem, pero ante todo lo expuesto cabe la interrogante:

b) ¿Existe incumplimiento de sentencia o dictamen constitucional por parte del Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha?

Se ha señalado ya que el obligado legalmente a dar cumplimiento a la resolución expedida por la Segunda Sala del ex Tribunal Constitucional en el Caso N.º 430-07-RA es el Ministro de Agricultura y Ganadería, por ser la autoridad emisora del acto impugnado (al haber dictado la resolución constante en el oficio N.º 0026 del 02 de febrero del 2007) y contra quien se dirigió la acción de amparo constitucional. Al Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha sí le correspondió ordenar la ejecución del fallo expedido por el Tribunal Constitucional, para lo cual notificó a las partes la resolución dictada en razón de la apelación interpuesta; pero en la ejecución, consta de autos (fs.37), una certificación de la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en la que se manifiesta que revisados los archivos de esa Dirección, que guarda los expedientes de las organizaciones pertenecientes a

la Provincia de Pichincha, no se encuentra ningún documento de la Asociación de Comerciantes Minoristas de Libre Mercadeo del Mercado Comunitario San Bartolomé de Lumbisí.

Del análisis del expediente y de la documentación que obra de autos, se establece que en el presente caso, se está discutiendo el destino que debe darse a un bien inmueble que pertenece a la Comuna de Lumbisí, en donde el 31 de mayo se realizó un plebiscito para decidir el destino del lote de terreno. El objetivo de la acción de amparo era dejar sin efecto la resolución constante en el oficio N.º 0026 del 02 de febrero del 2007, suscrito por el señor Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, y eso era lo pertinente, por lo que el señor Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha no puede ordenar la entrega del inmueble a ninguna persona.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, administrando Justicia Constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional, para el periodo de transición, expide la siguiente:

SENTENCIA:

1. Declarar que no existe incumplimiento de sentencia o dictamen constitucional por parte del señor Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha; en consecuencia, desechar la presente acción de incumplimiento deducida por María Olimpia Quishpe.
2. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dr. Patricio Pazmiño Freire
PRESIDENTE

Dr. Arturo Larrea Jijón
SECRETARIO GENERAL

Razón: Siento por tal, que la Sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, con ocho votos a favor, de los doctores: Luis Jaramillo Gavilanes, Patricio Herrera Betancourt, Alfonso Luz Yunes, Ruth Seni Pinoargote, Nina Pacari Vega, Manuel Viteri Olvera, Edgar Zárate Zárate y Patricio Pazmiño Freire sin contar con la presencia del doctor Hernando Morales Vinuesa, en sesión del día miércoles nueve de diciembre de dos mil nueve. Lo certifico.

Dr. Arturo Larrea Jijón
SECRETARIO GENERAL

ALJ/pgs/ccp